

| Rubro 21 | Clasificación de información |
|---|--|
| El área que generó, obtuvo, adquirió, transformó y/o conserve la información | Contraloría General de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. |
| El nombre del documento | Declaraciones Patrimoniales y de Intereses |
| Fracción del numeral séptimo de los presentes lineamientos que da origen a la reserva | III. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en la Ley General, la Ley Federal y las correspondientes de las entidades federativas |
| La fecha de clasificación | 20/04/2021 |
| El fundamento legal de la clasificación | Los artículos 113 fracción V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 68, fracción I de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en debida concordancia con el Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas |
| Razones y motivos de la clasificación | <p><i>Con fundamento en los Artículos 6 Apartado A fracción I y II, 16 Párrafo Segundo del Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación al artículo 68 fracciones I y III de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, considero se realice la Clasificación de la Información en la modalidad de Reservada; lo anterior en los términos siguientes:</i></p> <p>PRUEBA DE DAÑO EN LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA. SU VALIDEZ NO DEPENDE DE LOS MEDIOS DE PRUEBA QUE EL SUJETO OBLIGADO APORTE.</p> <p><i>De acuerdo con el artículo 104 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y con los lineamientos segundo, fracción XIII y trigésimo tercero, de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, aprobados por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y publicados en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de</i></p> |

2016, la prueba de daño es la argumentación fundada y motivada que deben realizar los sujetos obligados para acreditar que la divulgación de la información lesiona un interés jurídicamente protegido y que el daño que puede producir es mayor que el interés de conocer ésta. Para tal efecto, disponen que en la clasificación de la información pública (como reservada o confidencial), debe justificarse que su divulgación representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional; que ese riesgo supera el interés público general de que se difunda; y, que la limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio. Así, la prueba de daño establece líneas argumentativas mínimas que deben cursarse, a fin de constatar que la publicidad de la información solicitada no ocasionaría un daño a un interés jurídicamente protegido, ya sea de índole estatal o particular. Por tanto, al tratarse de un aspecto constreñido al ámbito argumentativo, la validez de la prueba de daño no depende de los medios de prueba que el sujeto obligado aporte, sino de la solidez del juicio de ponderación que se efectúe en los términos señalados.

Con base en lo anterior, resulta necesario establecer que los servidores públicos al servicio de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave con **funciones operativas**, se encuentren inmersos dentro de la conducción de investigaciones ministeriales; ya sea de que se trate de Investigaciones o Carpetas de investigación, según la terminología aplicable, de acuerdo a la entrada gradual en vigor, del Código Nacional de Procedimientos Penales.

En ese sentido, dicho personal **posee información valiosa** para ejercicio de las funciones del ministerio público, particularmente la relativa a la **investigación y persecución de los delitos**. Precisamente, **esa peculiaridad los convierte en sujetos de interés tanto de parte del Estado, como de la delincuencia organizada**.

Lo anterior en virtud de que los citados servidores públicos, forman parte fundamental del éxito de las investigaciones, así como del propósito de las mismas, pues son quienes de manera directa, tienen el contacto de las personas, sujetos, objetos insumos del delito, al realizar la investigación correspondiente.

Por tanto, **dar a conocer de manera indiscriminada esta información**, implica la divulgación de la misma que expresamente **pone en peligro la vida de los propios servidores públicos**, pues es posible que quienes cometieron algún delito, pueden identificarlos con diversos propósitos; **atentar contra su vida o integridad** a efecto de alterar la conducción o resultado de su trabajo, **atentar contra la vida de sus familiares con el mismo propósito, o bien para intentar**

ofrecerles un soborno.

En cualquiera de los casos previamente referidos, se hace identificables a los servidores públicos en comento, quienes pueden influir directamente en las entrevistas, investigaciones, peritajes, provocando que la persecución de los delitos se vea seriamente afectada, incluso, provocando la alteración de la escena del crimen, de pruebas, de entrevistas, o divulgando bajo la coacción de la que pueda ser objeto, información privilegiada contenida dentro de las investigaciones, como por ejemplo, la existencia de mandamientos judiciales.

Así las cosas, se sostiene que la divulgación de la información que nos ocupa, se hace perfectamente identificable a los **servidores públicos con actividades operativas de investigación de los delitos**, lo que **pone en peligro tanto su vida como la prevención o la persecución de los delitos**.

Con base al artículo 5 fracción VIII de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública que dice expresamente: "Instituciones de Seguridad Pública: a las Instituciones Policiales, de Procuración de justicia, del Sistema Penitenciario y dependencia encargadas de la Seguridad Pública a nivel federal, local y municipal"; razón por la cual, el personal de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, es personal dedicado a actividades en materia de seguridad.

Hipótesis legales a satisfacer.- Según lo establecido en las fracciones I, y III del artículo 70 de la Ley 875 de Transparencia citada, se cumple con las hipótesis normativas se la siguiente forma:

- I. **Que la divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público.-** Tal como se ha mencionado, tiene relación directa con el interés público pues atiende a una representación social con el objeto de perseguir los delitos, situación que claramente implica que el suscrito prevenga las situaciones que pudieran poner en riesgo la persecución de los delitos y que, por otra parte, sitúe en riesgo real al personal de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
- II. **Que la limitación de adecue al principio de proporcionalidad y represente el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.** Únicamente se reservan las Declaraciones Patrimoniales y de Intereses de personal operativo, quienes realizan actividades en materia de seguridad pública; particularmente la relacionada con la investigación y persecución del delito y de sus sujetos, razón por la cual, existe un equilibrio perfectamente compatible con el

| | |
|---|---|
| | <i>principio de proporcionalidad, pues solamente se reserva la información estrictamente necesaria, ofreciendo aquella que no se ubica en las hipótesis planteadas y que, además en caso de ser necesario solo se proporcionará la información estadística al respecto, con lo cual, se garantiza la medida menos restrictiva al derecho de acceso a la información</i> |
| Señalar si se trata de una clasificación completa o parcial | Parcial |
| En caso de ser parcial, las partes del documento que son reservadas | La relación de los nombres y las funciones que desempeñan los servidores públicos que prestan sus servicios en áreas de seguridad nacional o pública. |
| En su caso, la fecha del acta en donde el Comité de Transparencia confirmó la clasificación | 20/04/2021 |
| El plazo de reserva y si se encuentra o no en prórroga | 5 años |
| La fecha en que culmina el plazo de la clasificación | 20/04/2026 |
| Las partes o secciones de los expedientes o documentos que se clasifican | La relación de los nombres y las funciones que desempeñan los servidores públicos que prestan sus servicios en áreas de seguridad nacional o pública. |